

Principios ecológicos en las políticas públicas de ordenamiento territorial

Un análisis del Plan de Ordenamiento Territorial de Quibdó, Chocó, 2001-2017¹

Cidaly Marcela Mosquera Martínez ²

Jorge Eliecer Serna Agudelo ³

Resumen

Los recursos naturales se constituyen en la primera fuente de desarrollo integral y sostenible de los pueblos del mundo, sin embargo estos han sufrido un deterioro sistemático por parte el hombre. Es por esto que las ONU en 1972 proclama en Estocolmo los principios ecológicos y nace el concepto de Desarrollo Sostenible. Colombia ha demostrado cumplir con cada uno de los tratados internacionales a los cuales se somete, incorporándolos en el país mediante el bloque constitucional. El presente artículo realiza un análisis comparativo de los principios ecológicos que hacen referencia a la conservación del medio ambiente y todo lo que en este interviene en la política pública ambiental del municipio de Quibdó y, determinar si estos han sido o no tenido en cuenta a la hora de construir las políticas públicas del Plan Ordenamiento Territorial (POT) del ente territorial. Encontrando que este cumple en su mayoría con los principios, teniendo como eje de desarrollo la sostenibilidad ambiental, dirigida al fortalecimiento económico y social de los pueblos.

Palabras claves: Principios ecológicos, Políticas públicas, Plan de Ordenamiento Territorial, Quibdó.

¹ Este trabajo contó con la asesoría del Profesor German Valencia, Economista, Especialista en Gerencia Social, Magister en Ciencias Políticas y Doctor en Estudios Políticos. Profesor Titular del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Miembros de los grupos de investigación Estudios Políticos y Microeconomía Aplicada. Correos electrónicos: german.valencia@udea.edu.co.

² Contadora Pública, Especialista en Administración Pública Contemporánea, Aspirante a Magister en Gobierno y Políticas Públicas del departamento de Humanidades de la Universidad Eafit. Profesional Universitario y Docente Catedrática en la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba “UTCH”. Correos electrónicos: cmosque4@eafit.edu.co, cidaly.mosquera@utch.edu.co y cidalym3@hotmail.com

³ Biólogo, Aspirante a Magister en Gobierno y Políticas Públicas del departamento de Humanidades de la Universidad Eafit. Director del Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Hábitat “CEIBHA” Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba “UTCH” Docente Catedrático en la UTCH. Correos electrónicos: jsernaal@eafit.edu.co y jorgeserna123@gmail.com

Abstract:

Natural resources are the first source of integral and sustainable development for the peoples of the world, but these have suffered a systematic deterioration by man. That is why the UN in 1972 proclaimed the ecological principles in Stockholm and the concept of Sustainable Development was born. Colombia has demonstrated compliance with each of the international treaties to which it is submitted, incorporating them into the country through the constitutional bloc. This article makes a comparative analysis of the ecological principles that refer to the conservation of the environment and everything that is involved in the environmental public policy of the municipality of Quibdó and to determine whether these have been taken into account or not time to build the public policies of the Territorial Planning Plan (POT) of the territorial entity. Finding that this complies mostly with the principles, having as an axis of development the environmental sustainability, aimed at the economic and social strengthening of the peoples.

Key words: Ecological principles, Public policies, Territorial Ordinance Plan, Quibdó.

Agradecimientos

Primero que todo le damos gracias a Dios por todo lo maravilloso que ha puesto en nuestros caminos, sin la bendición de él estamos seguros que no hubiésemos estado en esta posición. A nuestros profesores de la EAFIT y compañeros que se convirtieron en parte de nuestras familias, todos los momentos dentro y fuera del claustro académico jamás se borrarán de nuestros pensamientos y corazones. A la corporación Manos Visibles y, en especial a la Doctora Paula Moreno por ser nuestra promotora y madrina en esta aventura de nunca acabar, como lo es la academia. Y por último y no menos importante a nuestras familias, Padres, Hermanos e Hijos, quienes se convierten en ese motor de aliento para aguantar los momentos más difíciles en esta etapa de nuestra vida. Gracias por todo, mil gracias.

Contenido

	Pág.
Introducción	4
1. Principios Ecológicos en la Agenda Política Internacional	8
1.1 Surgimiento de los principios ecológicos.....	8
1.2 Principios ecológicos.....	10
2. Adopción de los principios ecológicos en algunos países de América Latina y Colombia	11
2.1 Tres países: Brasil, Argentina y México	12
2.2 Legislación ambiental en Colombia.....	14
3. Principios Ecológicos y el Plan de Ordenamiento Territorial. El Caso Quibdó	17
3.1 Normatividad Ambiental del municipio de Quibdó	17
3.2 El análisis de los principios	19
4. Conclusiones	25
5. Referencias.....	27

Introducción

La administración municipal de Quibdó (Chocó-Colombia), facultada por la Constitución Política de 1991 en sus artículos 151 y 288, tiene la responsabilidad directa del futuro de su territorio y de garantizar de la misma forma la equidad y el equilibrio en el disfrute de los beneficios de su ordenamiento. Este, se está viendo afectado ya que se han venido presentando problemas de contaminación que han desencadenado a su vez daños ambientales, debido a la no inclusión de los principios ecológicos emanados por la Organización para las Naciones Unidas (ONU) en las políticas ambientales dentro del Plan de Ordenamiento Territorial de Quibdó (POT).

En la segunda década del siglo XXI (2017), hablar del cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad ambiental es tarea de todos los ciudadanos, pero nuestras labores cotidianas difícilmente demuestran realmente conciencia de la importancia del medio ambiente y su relación con el hombre. Los principios ecológicos hacen referencia a la conservación del medio ambiente y todo lo que en este interviene y se ha observado que los recursos naturales no están siendo aprovechados según esos principios. La idea de los POT es orientar y regular el uso, ocupación y transformación del territorio para obtener un orden concurrente y sistémico con las potencialidades y limitaciones naturales y el bienestar de sus habitantes (Cabeza, 2013, pág. 2).

Un POT se presenta como una oportunidad decisiva para frenar el detrimento del medio ambiente; además, permite crear bases para una correcta convivencia y un desarrollo humano sostenible (El Tiempo, 1999), pero podemos mencionar que en Colombia, en especial en territorios como Quibdó, Chocó-Colombia, un territorio rico en recursos naturales, las políticas públicas se encuentran en dualidades, debido a que el sistema económico del país, en los modelos como la globalización y el desarrollo industrial, se centran precisamente en la explotación de esos recursos naturales en que Quibdó es rico, lo que contribuye a la desestabilización de los ecosistemas y ocasionan más daños ambientales.

En Colombia en 1993 se expide la Ley 99, la cual crea el Sistema Nacional de Ambiente (SINA), bajo los principios ecológicos emanados por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1992 en Rio de Janeiro Brasil (Agenda 21) y el concepto de *desarrollo sostenible*. Esta Ley busca resolver los problemas ambientales del país por medio de la formulación de políticas públicas que

respondan a las necesidades de los territorios. Sin embargo en su aplicación encontró una serie de dificultades que no permitían cumplir con los principios ecológicos que la Agenda 21 profirió. Los entes territoriales locales no tenían suficientes herramientas para evitar el deterioro de los recursos natural de su territorio.

En ese sentido el Congreso de la Republica, 18 años después, crea la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) o Ley 1454 de 2011, que fue promulgada con el propósito de potencializar las capacidades de cada región del país. Mediante la autonomía administrativa de los entes territoriales, los cuales tendrían facultades para distribuir la ocupación del suelo a través de los Planes de Ordenamientos Territorial (POT). Siendo estos la política pública que respondiera a las necesidades de ocupación del suelo y aprovechamiento de los recursos naturales que se encontraban en las jurisdicciones de los entes territoriales.

La ONU ha realizado reuniones con sus países miembros con miras a mejorar la relación del hombre con el medio ambiente y sus recursos, y garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales del planeta y que estos pueden ser aprovechados por esta y las siguientes generaciones de hombres y mujeres. Por tal motivo, este organismo propone a los países en una serie de convenios firmados y avalados por ellos, donde los problemas ambientales que se presentan en el mundo debían ser tratados como problemas públicos, para que de esa manera las soluciones tuvieran un enfoque político y se reflejara en la gobernanza ambiental, que se relaciona con el gobierno y administración del medio ambiente y los recursos naturales. Es ahí cuando a partir de eso hecho aparecen las primeras políticas públicas ambientales o ecológicas en las agendas políticas de los distintos gobiernos en el mundo (Glifo, 2001).

Es común observar que en países ricos en recursos naturales, por lo general países en desarrollo, la comunidad está sumida en pobreza y en muchos otros casos en conflictos sociales de gran magnitud. En ese sentido, se caracterizan por la no explotación y aprovechamiento de sus recursos naturales para el beneficio del desarrollo y crecimiento económico de su país o Estado. En la mayoría de estos países los recursos son explotados por empresas o multinacionales extranjeras, lo que genera mucha más pobreza, ya que los recursos económicos no se quedan en el país. Lo anterior, se debe a que posiblemente en los países en desarrollo no existen políticas públicas ambientales claras que garanticen que el desarrollo del territorio sea coherente con los principios

ecológicos, de manera tal, que los recursos naturales sean aprovechados de una manera sostenible y sustentable. Por consiguiente, no se generan insumos para desarrollar una buena gobernanza ambiental en los territorios.

Territorios como Chocó, con una geografía bastante accidentada y muy rica en recursos naturales renovables y no renovables, cuentan con una biodiversidad⁴ alta, la cual no ha sido aprovechada por los entes territoriales del departamento del Chocó, en actividades económicas como el turismo y la producción de artesanías a base de productos no maderables del bosque, con el propósito de generar ingresos económicos y oportunidad laboral a las comunidades del territorio departamental, reflejando debilidades en las instituciones, partiendo desde la Alcaldía Mayor de Quibdó quien está facultada por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) para generar políticas públicas que ayuden a mitigar este tipo de fenómenos.

Seguido de la CARS Codechocó quien por Ley 99 del 1993, es quien debe realizar todo lo concerniente a la vigilancia, control y conservación de los recursos naturales. Para Asprilla y Serna (2013) el fracaso de las instituciones en la aplicación de la norma en la vigilancia y control de los recursos naturales, es debido a que las mismas no han realizado estudios estadísticos sobre el proceso de tráfico y disposición de los ejemplares posterior al mismo, elementos que son fundamentales para el diseño de estrategias de conservación del recurso faunístico y para el fortalecimiento de las acciones adelantadas por las autoridades ambientales, en el cumplimiento de funciones de vigilancia y de control. En cuanto a la pérdida de la cobertura boscosa⁵, según Palacios (2015), las variables que afectan la cobertura boscosa del departamento del Chocó son la explotación forestal, ampliación de la frontera agrícola y ganadera, los cultivos ilícitos y la explotación minera.

El departamento del Chocó presenta los mayores índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)⁶ del país; resumidas en pobreza, desempleo, desescolarización, etcétera; lo cual se agudiza con la ingobernabilidad, la cual está reflejada en las intervenciones administrativa y financieras

⁴ Representada por 132 especies de mamíferos, 578 de aves, 139 reptiles, 124 de anfibios, se encuentra entre los lugares con mayor tráfico de fauna silvestre del país. (Contraloría General de la Republica, 2005)

⁵ En cuanto a la cobertura boscosa del territorio chocoano, la cual para el 1990 se cuantificó un total de 251.949,52 hectáreas de bosque de los cuales se calculó que hasta el año 2014 se perdió 46.896,58 hectáreas que representan el 17,62% del total de bosque nativo (Palacios, 2015).

⁶ Método directo de identifica carencias de una población y caracteriza la pobreza.

que el gobierno central realizo en años anteriores a ciertos sectores públicos del departamento, los casos más importantes son el sector salud y el sector educación; los cuales según el gobierno nacional eran centros de corrupción. Estas intervenciones tampoco han sido la solución a los problemas de corrupción que se presentaban en estas instituciones de resorte departamental, pues las intervenciones generaron más déficit fiscal y problemas administrativos en la prestación de los servicios, resultando una ingobernabilidad. Otra causa que incide en la ingobernabilidad son las instituciones que existen en el departamento del Chocó que funcionan como dependencias de seccionales administrativas en otros departamento, lo cual implica retraso en la ejecución de las obligaciones de estas instituciones en el Chocó, afectando la eficacia y eficiencia de estas a la hora de prestar los servicios⁷.

El municipio de Quibdó Centro Mundial de Biodiversidad (Alcaldía de Quibdó, 2012), privilegiado por estar a la orilla del río Atrato, una de las cuencas hídricas más importantes de Latino América y, ser el primer recurso natural en Colombia declarado sujeto de derecho por la Sentencia T-622 de 2016; y que además, cuenta con bosques primarios y micro cuencas que rodean y cruzan al territorio quibdoseño. No obstante, el municipio de Quibdó comparado con otras ciudades capitales de Colombia, no presenta avances significativos en la lucha por preservar, conservar, administrar y aprovechar sosteniblemente los recursos naturales que posee este ente territorial.

El presente trabajo tiene como propósito analizar los principios ecológicos de la agenda política internacional, y como estos principios son adoptados por algunos países de Latinoamérica y finalmente evaluar la relación que estos principios tienen con el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Quibdó en el departamento del Chocó-Colombia. Analizaremos el POT de Quibdó, teniendo en cuenta algunos de los principios ecológicos promulgados por las ONU y la aplicación del concepto de desarrollo sostenible, con miras a estudiar cómo en particular el municipio de Quibdó, ha acogido los principios ecológicos en la gobernanza ambiental para el fortalecimiento institucional del territorio.

Para cumplir lo anterior se realizaron consultas de la normatividad de algunos países de latinoamericana (Argentina, Brasil, Colombia y México) y otros documentos académicos y

normatividad ambiental sobre el desarrollo sostenible. Al igual que la revisión de los principios ecológicos en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Quibdó.

1. Principios ecológicos en la agenda política internacional

1.1 Surgimiento de los principios ecológicos

En 1864, en Estados Unidos, el escritor Thoreau publica una reseña sobre sus experiencias *in situ* en el bosque de Maine. En este libro se relatan los cambios que ha observado paulatinamente en esta área de bosque natural, que para ese entonces, era explotada por aserradores propios de la región con instrumentación tecnológica para la época y que con los medios que tenían a la mano día tras día transformaban el entorno natural del bosque. Dice Thoreau (1864) que los bosques de Maine se transformaban en madera, rápidamente, al punto que producía un atasco en la navegabilidad del río, comparando la cantidad de árbol con la caída de la nieve blanca y que luego cada tronco quedaba reducida a tablas de dos o tres pulgadas. Este fue el primer escrito donde se hace referencia al daño estructural al medio ambiente cuando no existe un plan de aprovechamiento sostenible (Thoreau, 1864).

Años más tarde, en la obra literaria “Primavera silenciosa”, la cual se caracterizó por ser mucho más crítica y dejando en evidencia, el más alarmante de todos los atentados del hombre contra el ambiente, la contaminación del aire, la tierra, los ríos y el mar con materiales peligrosos e incluso letales, las sustancias químicas son los compañeros siniestros y poco conocidos de la radiación a la hora de cambiar la naturaleza misma del mundo, la naturaleza misma de su vida (Carson, 1960).

La comunidad internacional, liderada por los países más desarrollados e industriales, se ven en la obligación manifiesta de plantearse los problemas ambientales como agenda política para sus gobiernos. Becerra (2007) establece que los casos manifestaban un gran descontento por el *status quo* y la necesidad de resolver las diferentes amenazas sobre la naturaleza y la preocupación de los países desarrollados, en particular los europeos, por algunos problemas transfronterizos, la lluvia ácida y la destrucción del bosque tropical.

Por lo anterior, la ONU (1972) en Estocolmo, reúne a todos sus países afiliados, con el objetivo de tratar los problemas ambientales que se empezaban a evidenciar con más fuerza en el globo

terráqueo, teniendo como eje principal la relación entre el hombre y el medio ambiente, declarando principios ecológicos y políticos que permitieran en ese entonces dirigir el desarrollo económico de los estados del mundo (ONU, 1992). De acuerdo a la Comisión Brundtland es responsabilidad de la comunidad el desarrollo sostenible⁷; así pues, es necesario satisfacer las necesidades de las personas haciendo que estén aseguradas para el futuro, antes de cerciorar las propias insuficiencias.

En consecuencia, se dictan medidas de cooperación internacional, soberanía ambiental, crecimiento económico y ordenamiento territorial teniendo como base de desarrollo, el suelo, consumo y aprovechamiento de los recursos ambientales; dado que todo esto lleve a garantizar el bienestar y goce de las actuales y futuras generaciones de hombre y mujeres. A pesar de esta declaración, que buscaba la planificación del desarrollo de los pueblos del mundo, el medio ambiente, continuó deteriorándose a velocidades constantes. Algunos autores como Enrique Leff (1998) manifiestan que la racionalidad económica desterró a la naturaleza de la esfera de la producción, lo que generaron procesos de destrucción ecológica y degradación ambiental como “externalidades” del sistema. Dejando claro una vez más, que la sostenibilidad y crecimiento económico de los gobiernos no estaban basados en el concepto de sustentabilidad ambiental o ecológica⁸; el cual aparece como criterio normativo para la reconstrucción del orden económico, como una condición para la supervivencia humana y para un desarrollo durable; problematiza las formas de conocimiento, los valores sociales y las bases mismas de la producción, abriendo una nueva visión del proceso civilizatorio de la humanidad (Leff, 1998).

Una vez puesto en contexto el no cumplimiento de lo pactado en la Declaración de Estocolmo, la comunidad internacional convocada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en Rio de Janeiro, en 1992, proclama la Agenda 21, la cual se centra en prologar la vida del planeta, mediante la formulación de políticas públicas ecológicas que incluyan los conceptos de las buenas prácticas ambientales para lograr el desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 1992). Se puede decir, que esta agenda abrió las puertas para que los estados aplicaran los objetivos de la Agenda 21 en al plano nacional. De allí, que se recomienda la posibilidad de preparar informes nacionales que contengan obstáculos y desafíos al desempeñar las actividades

⁷ Relación entre el bienestar económico, los recursos naturales y la sociedad, evitando comprometer la vida del planeta.

⁸ Administración eficiente y racional de los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.

incluidas en el plan, para ser presentados a la Comisión sobre Desarrollo Sostenible (CDS) de la ONU (ONU, 2002).

En 1998 se emite el protocolo de Kyoto de la convención marco de las Naciones Unidas (ONU) sobre cambio climático, en donde las partes se reúnen con el objetivo de formular políticas públicas ambientales direccionadas a reducir los efectos del calentamiento global, sin restringir a los países de seguir haciendo aprovechamiento de los recursos naturales de una manera sustentable, teniendo en cuenta que se ocasione el menor efecto negativo para el medio ambiente y que genere la mayor rentabilidad para el hombre; promueve también, las prácticas agrícolas que vayan en consideración con el cambio climático (ONU, 1998).

1.2 Principios ecológicos

Los principios ecológicos aparecen por primera vez en la Declaración de Estocolmo, en una convención de las ONU en 1972, en donde abordaron temas cruciales para la protección, recuperación, prevención y aprovechamiento de los recursos naturales y la relación del hombre con estos recursos, que después fueron actualizados según los problemas ambientales en el tratado de Rio de Janeiro (Agenda 21) (*véase tabla 2*). En consecuencia la promulgación de estos principios se realiza con el propósito de que sirvan como instrumentos guía para que los estados de los países que están afiliados a la ONU, articulen la legislación ambiental existente o la construyan según el tratado y sus principios. Además todas las políticas de desarrollo que promulguen tengan en cuenta la aplicación de la Agenda 21.

Reafirmando la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972, y tratando de basarse en ella, con el objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas, procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial, reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra, nuestro hogar (ONU 1992).

2. Adopción de los principios ecológicos en algunos países de América Latina y Colombia

Luego de las convenciones sobre el medio ambiente, la tierra, el cambio climático y el hombre llevadas a cabo por las ONU en diferentes países, los gobiernos nacionales inician a realizar esfuerzos con mira a implementar los distintos principios ecológicos que se concertaron en dichas convenciones. Siendo la Declaración de Estocolmo en 1972, el inicio de la estructuración de una gobernanza ambiental fundada y soportada por los principios que se acordaron en dicha convención. Sin embargo, esta declaración no fue del todo suficiente para mitigar la destrucción sistemática y continua que sufría el medio ambiente del mundo, la cual estaba generando más pobreza. Esta situación, alertó a la comunidad internacional pertenecientes a las ONU a buscarles solución a dichos fenómeno antrópico de destrucción; por consiguiente, en 1992 en Rio de Janeiro Brasil se reúnen, dando como resultado la famosa Agenda 21, la cual actualiza los principios ecológicos estipulados en la Convección de Copenhague y, marcando una verdadera guía de administración del capital ambiental del mundo.

Uno de los aspectos importantes en este documento, es la implementación del concepto de desarrollo sostenible, en donde se articulan lo económico, ambiental y social, bajo la premisa de que el aprovechamiento de los recursos naturales debe ser planificado y ejecutado de manera racional, el cual permita el disfrute y goce de la actual y las futuras generaciones de hombres y mujeres. Esta noción de conservación, será la ruta que todos los estados nación deben aplicar en la gobernanza de los recursos naturales. Lo cual se ajusta al concepto emitido por la ONU en 1987 en el informe de Brundtland “*Informes Nuestro Futuro Común*”, donde sustentan que el desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

Con lo anterior se busca que los países deberán planificar políticas públicas en un marco de sostenibilidad y sustentabilidad ambiental, con el propósito de que el disfrute de las generaciones venideras pueda gozar de cada uno de los recursos naturales que nos brinda la naturaleza. Es así que gracia a esta proclamación, muchos países iniciaron a realizar reformas políticas a la legislación ambiental y en algunos casos de la constitución política, con el objetivo de que cuando se adopten decisiones sobre políticas económicas, sociales, fiscales, energéticas, agropecuarias,

mercantiles, de transporte y de otra índole se preste sistemáticamente más atención al medio ambiente y a las consecuencias que tendrán esas políticas para el medio ambiente (ONU, 2017).

Algunos países de Latino América, como México, Brasil y Argentina, quienes han reportado los mayores índices de contaminación en esta región en el periodo de 1980-1995 (Busto y Chacón, 2009), han respondido a este llamado de la comunidad internacional, a pesar de que ellos hacen parte de los países miembros de las ONU. Además se analizara la legislación colombiana y como esta aplica los principios ecológicos en dicha legislación.

2.1 Tres países: Brasil, Argentina y México

En México 1994 se crea la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), con lo cual se integran bajo el mismo sector los recursos naturales, la biodiversidad, la atención a los residuos peligrosos y a los problemas ambientales urbanos industriales. Posterior a este gran avance el cual se articula con los principios ecológicos en 1995 el SEMARNAP, publica el Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 1995-2000 cuyo objetivo general era frenar las tendencias de deterioro del medio ambiente y promover el desarrollo económico y social con criterios de sustentabilidad. Se planteaba hacer operativo y viable este programa a partir de un conjunto de instrumentos de política ambiental (FAO, 2017).

Argentina, luego de la Agenda 21 en Rio de Janeiro, realizó una reforma constitucional en la cual incluyó fuertemente una política ambiental que reflejara los principios que emanó la ONU. La reforma de la Constitución en 1994, en el artículo 41, expresa que

Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos” (Congreso de la republica de Argentina, 1995)

Por consiguiente, la República de Argentina promulgara una serie de leyes que permiten dinamizar la gobernanza ambiental con los principios ecológicos. Dando muestra de que la voluntad administrativa del Estado argentino con la protección del medio ambiente, va encaminado al desarrollo sostenible. Tanto que la Ley 25-675 o Ley General de Ambiente crea el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), máximo organismo ambiental de Argentina, el cual articula con los municipios y provincias todos los temas relacionados con el aprovechamiento sostenible del medio ambiente.

Brasil, por su parte, es el país con la legislación ambiental más completa de Latino América con respecto a los principios ecológicos dispuestos por las ONU en la Agenda 21. De igual manera, Brasil en la legislación ambiental fue uno de los primeros países que inicia a relacionar el desarrollo socio-económico, seguridad nacional y protección a la dignidad humana con la conservación, mejora y restauración de la calidad del medio ambiente con el propósito de garantizar la vida (OAS, 2014), y dando valor político al concepto de desarrollo sostenible.

En ese mismo sentido, se observa como la legislación ambiental brasileña ha sido coherente con cada uno de los tratados de la ONU y los principios promulgado por esta organización en cada uno de sus eventos internacionales. Siendo consecuente, asumen desde el primer momento los principios ecológicos redactados en la declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo en Estocolmo. Por otro lado, es importante destacar la cantidad de instituciones públicas que se han creado en Brasil para el desarrollo y ejecución de estas políticas públicas que ayuden en la gobernanza medioambiental.

Colombia, luego de 20 años comienza a asumir el reto de asociaciones de intentos de política y planificación, que busca darle solución a los problemas de localización industrial y a un desarrollo de planificación centralizada a través de los Planes de Ordenamiento Territorial; concepto que se

acuña en Europa a mediados del siglo XX y que comienza a entenderse como una política para el desarrollo equilibrado de las regiones y organización física del espacio (Massiris, 2006); y que pretende garantizar un desarrollo sostenible, articulado con los principios ambientales y que busca la incorporación de estos en el desarrollo.

Dado el análisis de como adoptaron algunos países de Latino América, los principios ecológicos expuestos por las Naciones Unidas (ONU) durante todos estos años en cada una de las magnas reuniones que se han llevado acabo, llegamos a inferir, que han realizado un esfuerzo importante en plasmar normativamente los principios ecológicos en las leyes de sus países; sin embargo, no se hace un análisis sobre el éxito en la ejecución de estas leyes, las cuales permitan fortalecer la gobernanza ambiental de latino América.

2.2 Legislación ambiental en Colombia

En Colombia, al igual que en algunos países de Latino América, el tema de los Principios Ecológicos llegó casi veinte años después de la promulgación de los mismos, a través de la Declaración de Estocolmo. La normatividad ambiental colombiana, se da a partir de la Constitución Política de 1991 en sus artículos 79, 80, 95, 267, 268, 313, 317, 334 y 339. Sin embargo, en cuanto a los principios ecológicos de la ONU, estos entran a tener rigor en la legislación de Colombia luego de la publicación de la Agenda 21 (Tratado de Río de Janeiro).

Con la Ley 99 de 1993 se crea el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), y se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA), el cual, reúne a todas las entidades del Estado para la protección, vigilancia y control de los recursos naturales renovables y no renovables. Esta misma ley, en el artículo primero, dispone los principios generales y dejando claro en el primero de los catorce principios que el proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Congreso Nacional de la Republica de Colombia, 1993). Y luego continúa con trece principios más orientados a la protección, conservación, prevención, recuperación y de manejo sostenible y sustentable de los recursos naturales del país.

Con la sanción de esta Ley se inician a reglamentar diferentes organismos e instituciones encargados de velar y salvaguardar el patrimonio natural y reducir la huella ecológica que se genera por el aprovechamiento desmedido de los recursos naturales del territorio colombiano. Es así como se crea el Consejo Nacional Ambiental del MADS, se formalizan las Corporaciones Autónomas regionales (CAR) y las Corporaciones Autónomas y de Desarrollo Sostenible (CARDS), las cuales desempeñan funciones trascendentales en el manejo, protección, vigilancia y control de los recursos naturales renovables y no renovables, constituyéndose como la primera autoridad ambiental regional. Lo que le da facultades para la expedición de licencias de explotación de los recursos naturales, la celebración de contratos con multinacionales encargadas de aprovechamiento del medio ambiente. Asimismo, mediante Decreto 1339 de 1994 se reglamenta el porcentaje del impuesto predial a favor de las Corporaciones Autónomas Regionales.

Con miras a darle autonomía presupuestal a las diferentes entidades encargadas de salvar y guardar los recursos naturales y con el fin de disminuir las externalidades negativas que se generan en las poblaciones humanas debido al deterioro ambiental, el estado colombiano en busca garantizar un buen ambiente sano promueve la Ley 139 de 1994, la cual crea el certificado de incentivo forestal, para así reforestar las zonas que han sufrido algún tipo de alteración en la dinámica ambiental (Congreso de la República de Colombia, 1994); pero lo más interesante, es que estos recursos pueden ser adquiridos por personas naturales o jurídicas no gubernamentales que estén realizando programas de restauración forestal.

Es importante destacar que el estado colombiano ha realizado esfuerzos importantes en cuanto a la legislación ambiental, teniendo como base los principios ecológicos emanados por las Naciones Unidas, aunque muchas de estas políticas están en proceso de adopción. En 1996 se creó la primera política nacional de biodiversidad, con el fin de que sirviera como guía para las instituciones del país. Sin embargo, esto no fue así, el gobierno nacional no atendió esta política como eje para conducir o decidir sobre el destino del medio ambiente. Y es por eso que 15 años después emiten la nueva Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE).

Cuyo objetivo es promover la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, de manera que se mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas

socioecológicos, a escalas nacional, regional, local y transfronteriza, considerando escenarios de cambio y a través de la acción conjunta, coordinada y concertada del Estado, el sector productivo y la sociedad civil. Esto significa que esta PNGIBSE será la que enmarque y oriente conceptual y estratégicamente todos los demás instrumentos ambientales de gestión (políticas, normas, planes, programas y proyectos), existentes o que se desarrollen, para la conservación de la biodiversidad en sus diferentes niveles de organización, además de ser base de articulación intersectorial y parte fundamental en el desarrollo del país (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2011).

Lo anterior da bases fundamentales administrativas que garanticen la buena gobernanza ambiental en el país, permitiendo que se puedan cumplir los principios ecológicos y se aplique el concepto de desarrollo sostenible. Sin embargo, institucionalmente se ha evidenciado la falta de eficacias y eficiencia de las entidades públicas del sector ambiental.

En Colombia, con la Ley 99 del 1993, se ha dado el primer paso para la implementación de los principios ecológicos dispuestos en los tratados anteriormente mencionados, la descentralización de los poderes administrativos y políticos que llegan con la Constitución Política de 1991, abren paso a que los gobiernos locales planeen el desarrollo de sus regiones. Con esto, se buscaba darle autonomía a las regiones apartadas del centro del país con el fin de aliviar las brechas sociales que existían entre las regiones. Sin embargo, hasta la fecha no se ha desarrollado tal política nacional a cabalidad como se tenía pensado, siguen siendo las zonas periféricas del país las menos desarrolladas, a pesar de tener riquezas naturales representadas en los recursos naturales que posee.

En este sentido, Leyva (2011) expresa que en la descentralización no se crearon mecanismo de coordinación intergubernamental en la coordinación de políticas públicas y esto generó un terreno fértil para el oportunismo político. Afirmaciones como estas, nos llevan a preguntarnos si en el caso Quibdó, la razón a una posible no inclusión o aplicación de los principios ecológicos en los planes de ordenamiento territorial sea por intereses políticos y económicos, ya que en este territorio se practican actividades de perturbación ambiental como la minería y la tala de árboles, dos actividades extractivas que generan cuantiosas ganancias económicas y más si se realiza sin control alguno.

La Ley 1454 de 2011 en el artículo 3° “*principios rectores del ordenamiento territorial*” expresa que la sostenibilidad el ordenamiento territorial conciliará el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal, la equidad social y la sostenibilidad ambiental, para garantizar adecuadas condiciones de vida de la población (Congreso de la republica de Colombia, 2011). En ese sentido los entes territoriales del país deberán enfocar las políticas públicas de ordenamiento territorial teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental, la cual emitió la ONU en los principios ambientales, debido a que Colombia adopta este concepto en la Ley 99 del 1993.

3. Principios Ecológicos y el Plan de Ordenamiento Territorial. El Caso Quibdó

3.1 Normatividad Ambiental del municipio de Quibdó

El territorio quibdoseño cuenta con 13 subcuencas, las cuales bañan al municipio, sirviendo como medio de comunicación y transporte, además del río Atrato principal cuenca hídrica del municipio, presenta tres unidades climáticas (Cálido súper húmedo, medio súper húmedo y muy frío y frío húmedo perhúmedo), con una precipitación anual que oscila entre 5.500 mm a 10.000 mm y una humedad relativa de 90%, potencializan las condiciones ambientales del ente territorial y dejando en evidencia que el desarrollo del municipio debe estar fundamentado en la aplicación de los principios ecológicos y el desarrollo sostenible sumando el poder turístico del municipio en corregimientos como Tutunendo, Icho y Pacurita los más populares y con mayor ingreso económico.

De acuerdo al artículo 65 de la Ley 99 de 1993 el municipio de Quibdó planifica, promueve y ejecuta programas y políticas sectoriales en relación a la conservación, control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de que estas sirvan como guía para el desarrollo y crecimiento socioeconómico del ente territorial. Además, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) en el artículo 2, faculta a los entes territoriales para la construcción y gestión de planes de organización político administrativa del territorio, con el fin de lograr una mejor gobernanza que fortalezca la institucionalidad cultural, ambiental, social y sobre todo económica de los territorios, bajo valores que identifiquen la idiosincrasia popular que armonice las regiones, el respeto por la identidad cultural y reconozca la diversidad geográfica.

En ese mismo sentido esta misma ley promueve la descentralización, la cual brinda a los entes territoriales autonomía en la planificación del territorio. Igualmente, la Ley 99 de 1993 en el artículo 1, inciso 1, 2, 3 y 6, expresa que el desarrollo económico del país se orientara según los principios universales expuestos por la ONU, entendiendo la biodiversidad como patrimonio nacional de la humanidad y que su aprovechamiento debe ser sostenible, guiados mediante políticas públicas ambientales que generen ambientes saludables para los seres humanos y una armonía con la naturaleza.

El municipio de Quibdó, atendiendo lo emanado por la LOOT construye un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en 2002, en el cual organiza la utilización del suelo y la división política administrativa del territorio, constituyendo 27 corregimientos, 14 resguardos indígenas y como centro administrativo a Quibdó (Capital). Por su parte, el concejo de Quibdó mediante el Acuerdo 013 del 11 de marzo de 2013 crea el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM), el cual tiene como objetivo la conservación, restauración y desarrollo de los bienes y servicios ambientales como mecanismos para mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades de los actuales y futuros habitantes del municipio de Quibdó cumpliendo con el principio N.1; y además estimula crear y mantener condiciones que contribuyan a la armonía del hombre y su entorno.

El POT de Quibdó divide el suelo según la importancia agraria que este posee, considerando la política general del POT para el municipio en el sentido de un desarrollo económico como medio de desarrollo. Fortalecido en la diversidad boscosa de los suelos del municipio y las especificaciones de cada tipo de cobertura vegetal y el uso que le dan a estos suelos. Siendo los usos más frecuentes la agricultura, la pesca, la urbanización y la minería (Alcaldía de Quibdó, 2002); actividades económicas que generan mucho dinero, pero afecta en gran medida las dinámicas naturales de los suelos, situación que no cumple con el principio ecológico número 8.

En particular la minería en el municipio de Quibdó se realiza a pequeñas escalas (minidragas seis y minidragas ocho), no obstante esto no quiere decir que sus efectos negativos en los recursos hídricos son mínimos, pues es posible evidenciar la muerte paulatina de varias microcuencas del municipio de Quibdó, hoy podemos ver microcuencas como Cabi, Guayabal, la Yesca, el Caraño y el río Munguido, con impactos negativos reflejados en lodos en suspensión, socavamiento del lecho del río, erosión de riberas, gran cantidad de basura y erosión hídrica. Lo más grave de todo

esto es que los materiales que recorren estos cuerpos de agua, van a parar al río Atrato, cuenca que hoy está protegida por la constitución política de Colombia con la Sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional, que de no ser así, continuaría recibiendo abusos por parte de los pobladores del municipio, ya que el POT no contempla medidas enmarcadas en la protección de este recurso, de manera contraria a los principios ecológicos uno, tres y cuatro.

La división espacial del suelo del municipio de Quibdó no ha tenido un diseño arquitectónico, funcional, económico, ambiental y urbanístico que facilite un desarrollo sostenible, lo cual no armoniza la sana convivencia del hombre con la naturaleza, premisa que surge de la simplificación de todos los principios ecológicos de la ONU. Por el contrario, el crecimiento ocupacional del espacio en el municipio, ha estado dinamizado más por las necesidades que surgen en el momento para los habitantes de la ciudad. En ese sentido, la creación de nuevos barrios que han forjado la ampliación de la urbanización en el municipio está motivado más por la invasión de predios que presentan algún tipo de abandono. Esto ha llevado a que los pobladores del municipio realicen prácticas abusivas con el medio ambiente, como por ejemplo tala y erosión del suelo, con el fin de acondicionar los terrenos para una posible construcción de viviendas. Esta situación de construcción de viviendas en lugares que no han tenido la supervisión de los entes de control y vigilancia, en su mayoría están cerca de cuerpos de agua, los cuales entran a ser recursos naturales en potencial amenaza de degradación por actividad humana. Estas consecuencias se reflejan en el estado actual de los cuerpos de agua que rodean y dividen al municipio de Quibdó.

3.2 El análisis de los principios

Los principios ecológicos emanados por la ONU se encuentran inmersos en el POT dando cumplimiento a las sugerencias realizadas en la Agenda 21 de que los países miembros de esos organismos incluyeran o no los principios ecológicos o de desarrollo sostenible como base para la formulación de políticas ambientales. En el POT de 2002 se encuentran los principios de la Agenda 21 desglosados en varios principios, los cuales sirvieron de presupuesto para la construcción de un Plan de Ordenamiento que estuviera acorde a los lineamientos del concepto de desarrollo sostenible. Por tal razón, las políticas de ordenamiento territorial estuvieron enmarcadas con la relación entre el hombre y los recursos naturales, el desarrollo sostenible (ambiental y económico), lo político y social, la conservación de los recursos naturales y el ámbito internacional.

El Plan incluye un modelo ocupacional del territorio donde los principios básicos de sostenibilidad ambiental son el fundamento para generar competitividad, equidad social y equilibrio funcional del territorio, para así cumplir con las expectativas sociales y ciudadanas ofreciendo un territorio con producción ambiental eficiente que respete las prácticas tradicionales de apropiación del territorio, oferta eco turística, pero que garantice una función ecológica equilibrada. Al observar la clasificación de los principios ecológicos según su finalidad, hemos valorado la necesidad de realizar una subclasificación y en ella indicar de qué forma se encuentra planteada en el POT 2001 de Quibdó:

- **Relación entre el hombre y los recursos naturales:** El criterio que se tuvo en cuenta para crear esta clasificación se debe a la interrelación específica entre el hombre y los recursos naturales. Dicha interacción responde a la necesidad de coexistir ya que el uno depende del otro y viceversa.
 - El derecho de las personas a gozar de un ambiente sano.
 - El derecho de las personas a disfrutar de paisajes urbanos y rurales que contribuyan a su bienestar físico y espiritual.
 - La función social y ecológica de la propiedad.
- **Desarrollo sostenible (Ambiental y Económico):** Esta categoría se orienta a que el desarrollo económico de una región debe estar enmarcado en la protección, restauración, y aprovechamiento sostenible y sustentable⁹ de los recursos naturales.
 - La distribución equitativa de las cargas y los beneficios del aprovechamiento territorial y de los recursos naturales, la restauración ambiental y el desarrollo urbano.
 - La preponderancia de los valores públicos institucionales, patrimoniales, culturales y ambientales frente a otros principios de apropiación territorial.

⁹ El término sustentable hace referencia a un proceso en donde además de que el aprovechamiento sea sostenible, este genere rentabilidad.

- El fomento de la concertación y conciliación de los intereses sociales, culturales, económicos y ambientales, mediante la participación de los pobladores y sus organizaciones.
- El municipio propenderá por el desarrollo de actividades productivas de bajo impacto ambiental acordes con las prácticas culturales locales.
- **Político y Social:** Esta categoría incluye los principios que le hacen un llamado a los países para que legislen ambientalmente, y así, crear instituciones ambientales y sociales que garanticen el cumplimiento de las mismas.

En este ítem, podemos hacer referencia a la política sectorial¹⁰ de medio ambiente y sostenibilidad de Quibdó, la cual comprende el sector primario, ligado a la minería, la agricultura, la ganadería, bosques y pesca entre otros, y adicionalmente, estos principios ecológicos blindan este tipo de productividad, siempre y cuando los efectos en las dinámicas naturales no se alteren de manera significativa, garantizando los demás sectores de productividad y competitividad.

- La protección del medio ambiente, atendiendo a las relaciones establecidas por las comunidades indígenas y negras con el medio natural.
- Mejores condiciones y calidad de vida de la población, atendiendo los principios y preceptos constitucionales y legales y las políticas, objetivos y estrategias de desarrollo de los niveles nacional, regional, departamental y municipal y particularmente con lo establecido por la Ley 388 de 1997.
- El respeto de la autonomía jurisdiccional de las Entidades Territoriales Indígenas consagradas por el Artículo 286 de la Constitución Política de Colombia de 1991.
- El Municipio apoyará, impulsará y gestionará por iniciativa propia, programas y proyectos que contribuyan a la recuperación del sistema fluvial de navegación, como una estrategia fundamental para generar condiciones equitativas de desarrollo territorial y mantenimiento de las ventajas competitivas.

¹⁰ Potencializa un sector específico de la economía, haciéndolo más productivo y visible.

- **Conservación de los recursos naturales:** Esta categoría como su nombre lo indica, los principios manifiestan la conservación del patrimonio natural de los diferentes espacios o nación.
 - La oferta sostenible de recursos eco sistémico, protegiendo la biodiversidad como patrimonio nacional y de interés de la humanidad, y determinantes del reequilibrio regional y la generación de ventajas competitivas para el municipio.
 - El desarrollo territorial del municipio, deberá obedecer a sus determinantes naturales y geográficas, con el fin de preservar los ecosistemas de manera armónica y equilibrada entre el sector urbano y rural, en su contexto regional.
 - En concordancia con el Artículo 1 de la Ley 388 de 1997 y en desarrollo de la Ley 70 y Ley 99 de 1993, del Decreto Ley 2811 de 1974, de la Ley 2 de 1959, el municipio propenderá por la protección de los recursos naturales en función de la apropiación local sostenible de los mismos, para el corto, el mediano y el largo plazo.
- **Índole internacional:** Esta categoría está orientada a las diferentes reglas de juego que tienen los principios para generar uniformidad en todos los estados, dándole suprema importancia a que las diferentes prácticas que se realicen no comprometan a otros países, respetando siempre lo global.

El POT 2001 del municipio de Quibdó, el cual aun a la fecha de la investigación se encuentra vigente, cumple con la especificaciones que la legislación Colombia exige para la construcción de un POT, asimismo en concordancia con la ley ambiental colombiana, este documento de políticas públicas cumple con los principios dispuestos por la ONU en la declaración de Estocolmo en 1972. Sin embargo, a pesar de que se cumple con los principios en la formulación de este POT, no se puede evidenciar en la práctica, aunque toca dejar claro que este trabajo de investigación no tiene como finalidad el análisis del cumplimiento o no de este. Solo que a simple vista se puede llegar a esa aseveración.

Tabla 2: Clasificación de los Principios Ecológicos, según su finalidad. Relación entre el hombre y los recursos naturales

PRINCIPIOS	CONCEPTO	CUMPLE/NO CUMPLE
PRINCIPIO 1	Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.	✓
PRINCIPIO 3.	El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras.	✓
PRINCIPIO 4.	A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada.	✓

Desarrollo sostenible (Ambiental y Económico)

<i>PRINCIPIO 5.</i>	Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo.	✓
<i>PRINCIPIO 8.</i>	Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas.	✓
<i>PRINCIPIO 9.</i>	Los Estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su propia capacidad de lograr el desarrollo sostenible, aumentando el saber científico mediante el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos, e intensificando el desarrollo, la adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías, entre estas, tecnologías nuevas e innovadoras.	✓
<i>PRINCIPIO 22.</i>	Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible.	✓
<i>PRINCIPIO 25.</i>	La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables.	✓

Políticos y Sociales

<i>PRINCIPIO 11.</i>	Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y económico injustificado para otros países, en particular los países en desarrollo.	✓
<i>PRINCIPIO 13.</i>	Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. Los Estados deberán cooperar asimismo de manera expedita y más decidida en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e	✓

	indemnización por los efectos adversos de los daños ambientales causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo su control, en zonas situadas fuera de su jurisdicción.	
<i>PRINCIPIO 20.</i>	Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar con su plena participación para lograr el desarrollo sostenible.	✓
<i>PRINCIPIO 21.</i>	Debería movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes del mundo para forjar una alianza mundial orientada a lograr el desarrollo sostenible y asegurar un mejor futuro para todos.	✓

Conservación de los recursos naturales

<i>PRINCIPIO 15.</i>	Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.	✓
<i>PRINCIPIO 17.</i>	Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente.	✓
<i>PRINCIPIO 23.</i>	Deben protegerse el medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos sometidos a opresión, dominación y ocupación.	✓

4. Conclusiones

Los países pertenecientes a la ONU han sido los grandes protagonistas en la lucha por la conservación, restauración, preservación, y aprovechamiento sostenible en los recursos naturales,

evidenciándose en la adopción de los principios ecológicos en cada uno de sus planes de gobierno, lo que genera el desarrollo sostenible de las regiones. Estos principios son instrumentos de regulación que permiten tratar los problemas ambientales como problemas públicos y políticos, dejando claro que el desarrollo humano está relacionado íntimamente con el entorno natural; además, de alguna manera le da al medio ambiente un valor intrínseco para las relaciones entre diferentes naciones debido a que garantizan el respeto por la soberanía ambiental y su aplicación en los planes de ordenamiento territorial dan la ruta para que haya un desarrollo sostenible.

Una vez revisada la legislación de Brasil, Argentina, México y Colombia, encontramos que los principios emanados por la ONU están inmersos en la legislación ambiental de estos países. Esto permitió la creación de diferentes instituciones encargadas de proteger, preservar y controlar todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. En Quibdó, se evidencia cada uno de los principios ecológicos emanados por la ONU dentro de su plan de ordenamiento territorial, partiendo que el desarrollo económico del municipio incluye como medio a los recursos naturales y que el aprovechamiento de estos aportan al desarrollo y crecimiento del municipio, aunque algunos no establecen claramente los límites de crecimiento urbanísticos con respecto a la conservación o la no explotación y conservar los diferentes parches de bosques naturales que permiten disminuir la pluviosidad en el municipio y también la plasticidad que tiene la misma legislación para modificar los diferentes puntos de ordenamiento con el fin de suplir necesidades particulares que no aportan al desarrollo colectivo. Ha habido varias convecciones que han modificado los límites urbanísticos, para la construcción de viviendas y obras civiles cerca a cuerpos de agua y han modificado la altura de mismas construcciones.

Finalmente, queda por analizar los resultados de la implementación de los principios ecológicos en el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Quibdó y por ende las evidencias en cuanto al ordenamiento y ocupación del espacio en el municipio de Quibdó, por tanto se hace el llamado a que se continúe con la evaluación de la aplicación como tal del plan en las políticas ambientales en Quibdó y verificar si realmente los principios ecológicos han aportado al desarrollo del Municipio de Quibdó, porque a pesar que se cumplen en un 85,19%, se evidencio que los principios uno, tres, cuatro y ocho, no se encuentran inmersos en el POT del municipio de Quibdó, representados en una cifra porcentual de 14,81, dejando en evidencia la necesidad urgente de que las políticas públicas no sólo sean una guía de elaboración de documentos, sino más bien que estas

generen la obligatoriedad de elaborar las actividades allí descritas; ya que esto deja claro la falla en la implementación de estas, porque a la final se convierte en un mecanismo desarticulado que intenta resolver problemas pero que no logra orientarse hacia la sostenibilidad ambiental, lo que ocasiona que difiera la teoría de la práctica.

Referencias Bibliográficas

Alcaldía de Quibdó. (2002). *Plan de Ordenamiento Territorial. Documento Publico*. Quibdó, Colombia: Alcaldía de Quibdó.

Alcaldía de Quibdó (2012). *Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015*. Quibdó, Colombia: Alcaldía de Quibdó.

Becerra, M. R. (2007). *Surgimiento y evolución de la temática ambiental como interés público*. Santa Marta, Colombia.

Bustos, C. & Chacón, G. (2009). El desarrollo sostenible y la agenda 21. *Telos*, 164-181.

Cabeza, Á. M. (2013). *www.uptc.edu.co*. Recuperado el 21 de marzo de 2018, de [www.uptc.edu.co:
http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/eventos/2013/cf/pgtiate/memorias/documentos/cambios_recientes_polxticas.pdf](http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/eventos/2013/cf/pgtiate/memorias/documentos/cambios_recientes_polxticas.pdf)

Carson, R. (1960). *Primavera Silenciosa*. Barcelona, España.

Congreso de la republica de Argentina. (3 de enero de 1995). www.biblioteca.org.ar/libros/201250.pdf. Recuperado el 16 de abril de 2018, de www.biblioteca.org.ar/libros/201250.pdf: <http://www.biblioteca.org.ar/libros/201250.pdf>

Congreso de la Republica de Colombia. (1994). *Ley 139 de 1994*. Bogotá, Colombia: Recuperado de <https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/ley-139-de-1994.pdf>

Congreso Nacional de la Republica de Colombia. (1993). *Ley 99 del 93*. Bogotá, Colombia. Recuperado de <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297>

Contraloría General de la República de Colombia (2005). *Comercio de bienes derivados de la vida silvestre*. En: Mancera, N.J. & Reyes, O. (Eds.). Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2004-2005 - Informe Anual al Congreso de la República de Colombia. Bogotá: Contraloría Delegada para el Medio Ambiente.

Corte Constitucional de Colombia (2016). *Sentencia T-622 de 2016, T-5.016.242*

DANE (2016). *Censo Poblacional*.

El Tiempo. (20 de noviembre de 1999). *www.eltiempo.com*. (R. e. Tiempo, Editor, E. Tiempo, Productor, & EL Tiempo) Recuperado el 21 de marzo de 2018, de [www.eltiempo.com](http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-955806): <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-955806>

FAO (2017). *Legislación ambiental*. Recuperado de <http://www.fao.org/wairdocs/LEAD/X6372S/x6372s09.htm>

Glifo, N. (2001). La dimensión ambiental en el desarrollo de América latina. Santiago de Chile: naciones unidas. comisión económica para América Latina y el Caribe.

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI. (2006). *Libro Rojo Maderables*. Recuperado de: <http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2016/12/LibroRojoMaderables.pdf>

Leff, E. (1998). *La Ecología Política en América Latina: Un Campo en Construcción*.

Massiris, C. A. (2006). *Políticas Latinoamericanas de Ordenamiento Territorial: Realidad y Desafíos*. Tunja, Colombia UPTC.

Mayr, J. (1999). Gestión ambiental para la fauna silvestre en Colombia. *Rev. Acad. Colomb. Cienc.* 23 (Supl.): 712-715.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2011). *Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos - PNGIBSE*. Bogotá, Colombia: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial. Recuperado de http://www.humboldt.org.co/images/pdf/PNGIBSE_espa%C3%B1ol_web.pdf

OAS (2014). Lei N° 6.938, de 31 de agosto de 1981. Recuperado de http://www.oas.org/dsd/fida/laws/legislation/brazil/brazil_6938.pdf

Organización de las Naciones Unidas (1987). *Nuestro futuro Común*.

Organización de las Naciones Unidas (1972). *Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano*. Estocolmo, Suecia: Organización de las Naciones Unidas.

Organización de las Naciones Unidas (1992). *Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático*.

Organización de las Naciones Unidas (1992). *Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo*. Rio de Janeiro, Brasil: Organización de las Naciones Unidas. Recuperado de <http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm>

Organización de las Naciones Unidas (1992). *Qué es Agenda 21?* Recuperado de <http://www.sanantoniodebenageber.com/pages/que-es-agenda-21>

Organización de las Naciones Unidas (1998). *Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático*.

Organización de las Naciones Unidas (2002). *Cumbre de Johannesburgo*.

Organización de las Naciones Unidas (2017). *Integración del medio ambiente y el desarrollo en la adopción de decisiones*. Recuperado de: <http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21spchapter8.htm>

Palacios, E. (2015). *Análisis multitemporal en la cobertura boscosa de la zona norte del departamento del Chocó, 1990 - 2014*. Manizales, Colombia: Universidad de Manizales. Recuperado de: http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/2459/Palacios_Bermudez_Erika_2015.pdf?sequence=1

- Palacios, Y. (2013). Diagnóstico sobre el decomiso de fauna silvestre en el Departamento del Chocó (pacífico norte colombiano). *Rev.udcaactual.divulg.cient.* 16 (1), pp.175-184.
- Rangel, J. O. (2004). *Colombia diversidad biótica. El Chocó Biogeográfico. Costa pacífica IV* Universidad Nacional de Colombia. Bogotá: Ed. Guadalupe.
- Rodríguez, J. V., Alberico, M., Trujillo, F. & Jorgenson, J. (2006). *Libro Rojo de los mamíferos de Colombia. Libros rojos de las especies amenazadas de Colombia.* Conservación Internacional-Colombia, Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Bogotá, Colombia.
- Thoreau, H. D. (1864). *Los Bosques de Maine.*
- UICN (2017). Recuperado de <http://www.iucnredlist.org/>: <http://www.iucnredlist.org/>
- UICN. (06 de octubre de 2017). <http://www.iucnredlist.org/>. Obtenido de <http://www.iucnredlist.org/>: <http://www.iucnredlist.org/>